Nacional de la Vivienda de veinte de junio de mil novecientos setenta y tres, debemos revocar y revocamos ambas resoluciones por no ser conformes a derecho, así como por allanamiento de la Administración demandada, con devolución al recurrente de las multas que se le impusieron y las demás consecuencias inherentes a esta revocación; sin hacer expresa imposición de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 4 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.

9956 *ORDEN de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 504.326.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido ante el Tribunal Supremo, Sala Quinta, con el número 504.326, interpuesto por la «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.» (ENHER), contra resolución de 25 de noviembre de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 30 de noviembre de 1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que rechazando los motivos de inadmisibilidad aducidos por el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la "Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana", contra la Resolución del Ministro de la Vivienda de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos setenta y uno y la presunta desestimatoria del recurso de reposición, referentes a expropiación y justiprecio de la parcela número cuatrocientos cuatro coma cero uno del término municipal de Paláu de Plegamans, afectada por el área de expropiación urbanística "Riera de Caldas", Barcelona: y no hacemos especial condena respecto a las cotas causadas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 4 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeación.

9957 *ORDEN de 4 de marzo de 1980 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 13 de diciembre de 1978.*

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de apelación promovido ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo por don Antonio García Prada y por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, de 24 de mayo de 1977, en pleito relativo al justiprecio de las fincas número 68 y 88 del sector Plaza de Castilla, sitas en las calles Bravo Murillo, número 382 y Sófora, número 39, respectivamente, expropiadas por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, por el Alto Tribunal ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente dice así:

«Fallamos: Que rechazando los recursos de apelación interpuestos por don Antonio García Prada y por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid contra la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y siete, sobre justiprecios de las fincas número trescientos ochenta y dos de la calle Bravo Murillo y número treinta y nueve de la calle Sófora, respectivamente, números sesenta y ocho y ochenta y ocho del plan del sector de Plaza de Castilla, de esta capital, debemos confirmar y confirmamos los pronunciamientos contenidos en dicha sentencia; y no hacemos especial condena respecto a las costas causadas en esta segunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguiente de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director gerente del Instituto Nacional de Urbanismo y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid.

9958 *RESOLUCION de 30 de abril de 1980, de la Octava Jefatura Regional de Carreteras, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras: 5-CO-291, «Construcción de puente y accesos. CN-432, de Badajoz a Granada. P. k. 23,200, término municipal de La Albuera.*

La Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, por Resolución de 8 de mayo de 1979, ha ordenado la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto mencionado, al que por estar incluido en el programa de inversiones del vigente Plan de Desarrollo, le es de aplicación el párrafo b) del artículo 42 del texto refundido aprobado por Decreto 1541/1972, de 15 de junio, por lo que se considera implícitas las declaraciones de utilidad pública, necesidad de ocupación y urgencia para la ocupación de los bienes y derechos afectados con los efectos que establecen en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Jefatura ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados que figuran en la relación adjunta, para que comparezcan el próximo día 29 de mayo de 1980, a las doce horas, en el Ayuntamiento de La Albuera, al objeto de trasladarse al propio terreno para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados personalmente o por medio de Apoderado notarial para actuar en su nombre, aportando los documentos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos de los dos últimos años de la contribución, pudiéndose hacer acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares de derecho o intereses directos sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir en la relación, podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante esta Octava Jefatura Regional de Carreteras—División de Actuación Administrativa— para subsanar errores y completar datos aclarativos o justificantes en su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 30 de abril de 1980.—El Ingeniero Jefe regional, P. D., el Jefe de la División, José Pérez Valdivieso.—7.225-E.

RELACION QUE SE CITA

Término municipal: La Albuera

Finca número	Propietario	Naturaleza del terreno
1	Doña Inés Meléndez Guijarro.	Tierra calma.
2	Excelentísimo Ayuntamiento de La Albuera	Tierra calma.
3	Cañada (zona dominio público).	Tierra calma.

MINISTERIO DE EDUCACION

9959 *ORDEN de 29 de febrero de 1980 por la que se dispone el cese en sus actividades docentes de los Centros de Formación Profesional de primer grado, dependientes del Ministerio de Agricultura, de Arenas de San Pedro (Avila) y Chiclana de la Frontera (Cádiz).*

Ilmo. Sr.: Vistos los escritos elevados por los Centros de Formación Profesional de primer grado de Arenas de San Pedro (Avila) y Chiclana de la Frontera (Cádiz), dependientes del Ministerio de Agricultura, en súplica de que se autorice a los mismos el cese de sus actividades docentes, y vistos asimismo los informes emitidos por la Dirección General de Capacitación y Extensión Agrarias del Ministerio de Agricultura y Delegados provinciales del Ministerio de Educación en las provincias de Avila y Cádiz,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que los Centros de Formación Profesional de primer grado de Arenas de San Pedro y Chiclana de la Frontera, dependientes del Ministerio de Agricultura, cesan con efectos del presente curso académico en sus actividades docentes en la rama Agraria del primer grado de Formación Profesional.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 29 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan Manuel Ruigómez Iza.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

9960

ORDEN de 24 de marzo de 1980 por la que se convoca una beca para seguir estudios en el «Colegio del Mundo Unido Atlántico», en Gales (Gran Bretaña), durante los cursos 1980-1981 y 1981-1982.

Ilmos. Sres.: Con el fin de continuar el programa de concesión de becas para cursar estudios en los «Colegios del Mundo Unido» que viene realizando el Ministerio de Educación desde hace varios cursos y de acuerdo con el artículo 35 del Régimen General de Ayudas al Estudio que autoriza la publicación de convocatorias especiales,

Este Ministerio, a propuesta del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se convoca una beca para seguir estudios en el «Colegio del Mundo Unido Atlántico», en Gales (Gran Bretaña), durante los cursos 1980-1981 y 1981-1982.

Art. 2.º La beca tiene por objeto hacer posible la estancia en dicho Centro durante dos cursos de treinta y nueve semanas cada uno.

Art. 3.º Los solicitantes deberán haber terminado los estudios de Bachillerato y reunir los siguientes requisitos:

- Haber nacido después del 1 de abril de 1981.
- Poseer un buen expediente académico.
- Tener un sólido conocimiento del idioma inglés que permita seguir normalmente las explicaciones que se impartan en las clases.
- Justificar que la situación económica familiar le impide pagar los gastos del Colegio y por ello solicitan la beca.

Art. 4.º El importe de la beca cubrirá los gastos de escolaridad y viaje exclusivamente durante los cursos 1980-1981 y 1981-1982, debidamente justificados. Cualquier gasto que rebasara los referidos conceptos será por cuenta del alumno.

Art. 5.º Las solicitudes deberán dirigirse al Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante (Torrelaguna, 58, Madrid, 27), y se presentarán en el plazo de treinta días, a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Se podrá presentar también de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo a través de las Oficinas de Correos o Consulares o de los Gobiernos Civiles.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de una certificación de nacimiento, certificación académica personal comprensiva de las calificaciones obtenidas durante los cursos de Bachillerato ya terminados y la justificación a la que se refiere el apartado d) del artículo 3.º Podrán asimismo acompañarse aquellos otros documentos que los solicitantes consideren pueden constituir méritos adecuados.

Art. 6.º La resolución del concurso se hará en una entrevista ante un Jurado compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.

Vicepresidente: El Secretario general del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.

Vocales: Dos Catedráticos de Institutos Nacionales de Bachillerato, de los que uno de ellos será de Lengua inglesa, más aquellas otras personas que considere el Presidente conveniente incorporar al Jurado.

Secretario: El Jefe del Servicio de Régimen de Becas.

Art. 7.º Para la prueba de suficiencia de conocimiento de la Lengua inglesa, los solicitantes recibirán del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante las instrucciones pertinentes al respecto.

Art. 8.º Los estudios en el Colegio del Mundo Unido se convalidarán de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 9.º El importe de la beca será abonado por el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante con cargo a los capítulos correspondientes del Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades.

Lo que comunico a VV. II.

Dios guarde a VV. II.

Madrid, 24 de marzo de 1980.

OTERO NOVAS

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.

9961

ORDEN de 28 de abril de 1980 por la que se crea en el Departamento una Comisión de Medios Audiovisuales.

Ilmo. Sr.: La utilización creciente de medios audiovisuales constituye un fenómeno típico de nuestra época cuya importancia no puede ser ignorada en el ámbito educativo. Así, junto a su empleo como elemento complementario de la actividad docente ordinaria, la eficacia de determinadas acciones educativas que hoy reclaman una acción preferente, tales como la educación permanente de adultos o la de los emigrantes, dependen en buena parte del uso de dichos medios.

Por todo ello, resulta conveniente la creación de una Comisión integrada por representantes de aquellos servicios, que, a la vez que asegure la debida coordinación entre los mismos, realice estudios y formule propuestas que desarrollen y hagan más efectiva la utilización de tales medios didácticos.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Con la finalidad de coordinar y potenciar la utilización de los medios audiovisuales se crea una Comisión con el nombre de Comisión Material de Medios Audiovisuales que tendrá la composición siguiente:

Presidente: El Secretario general técnico.

Vicepresidente: El Director del Servicio de Publicaciones,

Vocales:

Un representante de la Dirección General de Enseñanzas Medias, otro de la Dirección General de Educación Básica y otro de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, con rango de Subdirector general, quienes podrán delegar en un Jefe de Servicio.

Un representante del Instituto Nacional de Ciencias para la Educación.

Un representante del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas.

El Director del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia.

El Director del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia.

Secretario: El Subdirector general de Estudios.

Si el desarrollo de los trabajos de la Comisión lo aconsejase podrán ser incorporados a la misma otros miembros.

Segundo.—La Comisión ministerial sobre Medios Audiovisuales tendrá las funciones siguientes:

a) Informar los planes, programas y proyectos sobre medios audiovisuales elaborados por los servicios representados en la Comisión.

b) Realizar estudios y formular propuestas para el desarrollo y la más efectiva utilización de los medios audiovisuales en la enseñanza.

c) Estudiar y proponer las medidas precisas para la plena utilización de la infraestructura de Medios Audiovisuales de los Servicios del propio Ministerio.

d) Promover relaciones con otros servicios oficiales ajenos al Departamento, así como con instituciones privadas, que realicen actividades en relación con los medios audiovisuales y su aplicación a la enseñanza.

e) Informar los Convenios que suscriba el Departamento sobre la materia.

f) Desarrollar cuantas otras actividades tiendan a coordinar y potenciar la acción del Departamento en este campo.

Tercero.—La Comisión podrá constituir en su seno ponencias y grupos de trabajo para el estudio de cuestiones específicas, a los que podrán ser incorporados otros funcionarios del Departamento.

Cuarto.—La Comisión informará periódicamente a la Subsecretaría del Departamento del desarrollo de sus trabajos.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de abril de 1980.

OTERO NOVAS

Ilmo. Sr. Secretario general técnico del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO

9962

RESOLUCION de 22 de abril de 1980, de la Dirección General de Trabajo, por la que se homologa el Convenio Colectivo interprovincial para la «Empresa Nacional del Aluminio, S. A.», suscrito el día 21 de marzo de 1980 por la representación de la Empresa y de sus trabajadores.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito interprovincial, para la «Empresa Nacional del Aluminio, S. A.», y sus trabajadores para los centros de trabajo de Avilés y Valladolid; y